

16

INCIDENCIA

**DEL EJERCICIO PROCESAL EN EL ACCESO A LA JUSTICIA
DESDE LOS CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS**



© 2025; Los autores. Este es un artículo en acceso abierto, distribuido bajo los términos de una licencia Creative Commons que permite el uso, distribución y reproducción en cualquier medio siempre que la obra original sea correctamente citada.

INCIDENCIA

DEL EJERCICIO PROCESAL EN EL ACCESO A LA JUSTICIA DESDE LOS CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS

IMPACT OF PROCEDURAL PRACTICE ON ACCESS TO JUSTICE THROUGH FREE LEGAL CLINICS

Wendy Pilar Romero-Noboa¹

E-mail: wendy.romero@unach.edu.ec

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8550-2864>

Nelson Francisco Freire-Sánchez¹

E-mail: nffreire@unach.edu.ec

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3791-8125>

Cinthya Stefania Montesdeoca-Parra¹

E-mail: cinthya.montesdeoca@unach.edu.ec

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-0465-4760>

María Josse Ramos-Castillo¹

E-mail: josse.ramos@unach.edu.ec

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-0459-1926>

¹ Universidad Nacional de Chimborazo, Riobamba, Ecuador.

Cita sugerida (APA, séptima edición)

Romero-Noboa, W. P., Freire-Sánchez, N. F., Montesdeoca-Parra, C. St., & Ramos-Castillo, M. J. (2025). Incidencia del ejercicio procesal en el acceso a la justicia desde los Consultorios Jurídicos Gratuitos. *Revista Metropolitana de Ciencias Aplicadas*, 8(S2), 147-155.

Fecha de presentación: 15/05/2025

Fecha de aceptación: 30/07/2025

Fecha de publicación: 01/09/2025

RESUMEN

El presente estudio analiza el impacto del ejercicio de la litigación jurídica en los Consultorios Jurídicos Gratuitos como herramienta fundamental para garantizar el acceso a la justicia en poblaciones vulnerables. A partir de una revisión documental y análisis de casos representativos, se evidencia que el acompañamiento legal efectivo en procesos judiciales no solo fortalece los derechos fundamentales de los usuarios, sino que también constituye un espacio formativo clave para los estudiantes de derecho. Se discuten las implicaciones jurídicas, sociales y pedagógicas de esta práctica, así como los desafíos institucionales que enfrentan los consultorios frente a la creciente demanda de servicios. Los resultados permiten comprender la relevancia del ejercicio procesal como puente entre la formación académica y la función social del derecho, destacando su valor estratégico en la construcción de una justicia inclusiva y equitativa.

Palabras clave:

Acceso a la justicia, litigación, educación jurídica, consultorios jurídicos, derecho y sociedad.

ABSTRACT

This study examines the impact of legal litigation practices within Free Legal Clinics as a fundamental mechanism to ensure access to justice for vulnerable populations. Through a documentary review and analysis of representative cases, the research shows that effective legal representation not only strengthens users' fundamental rights but also serves as a key educational platform for law students. The paper discusses the legal, social, and pedagogical implications of this practice, as well as the institutional challenges faced by clinics amid growing demand. Findings highlight the strategic value of procedural engagement as a bridge between academic training and the social function of law, emphasizing its role in building a more inclusive and equitable justice system.

Keywords:

Access to justice, litigation, legal education, legal clinics, law and society.

INTRODUCCIÓN

La litigación jurídica desde los consultorios jurídicos gratuitos constituye un componente esencial en la construcción de una justicia equitativa, accesible y centrada en la garantía de derechos fundamentales, particularmente para los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Estos espacios, generalmente vinculados a instituciones de educación superior, cumplen una doble función: por un lado, permiten que estudiantes de derecho, bajo la guía y supervisión de docentes y profesionales experimentados, ofrezcan asesoría y representación legal a personas que carecen de los recursos económicos para contratar servicios jurídicos privados; por otro, fortalecen la formación práctica, ética y social de los futuros juristas, consolidando un modelo educativo basado en la responsabilidad social universitaria (Romero Noboa et al., 2025).

El acceso a la justicia, considerado un derecho humano fundamental, está consagrado en múltiples instrumentos jurídicos internacionales, entre ellos el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

A pesar de su amplio reconocimiento normativo, este derecho enfrenta obstáculos recurrentes derivados de barreras estructurales, económicas, geográficas y culturales que impiden su ejercicio pleno, especialmente en contextos de desigualdad social y exclusión. La ausencia de asistencia legal adecuada puede traducirse en indefensión, desprotección de derechos básicos y perpetuación de inequidades históricas.

En este escenario, los consultorios jurídicos gratuitos emergen como instrumentos de equidad y transformación social. Su aporte no se limita a la resolución de casos particulares, sino que genera un impacto colectivo al reducir las asimetrías de poder entre ciudadanos y el sistema judicial.

A través de ellos, se materializa una visión democratizadora del derecho, acercando el conocimiento jurídico a las comunidades y promoviendo procesos de empoderamiento ciudadano frente a las instituciones. Asimismo, estos espacios contribuyen a la creación de una cultura jurídica participativa, donde los beneficiarios no solo reciben asesoría, sino que también adquieren herramientas para comprender y defender sus propios derechos.

El valor pedagógico de los consultorios resulta igualmente relevante. Al integrar la práctica procesal con un enfoque ético y humanista, se fomenta en los estudiantes una visión crítica del ejercicio profesional, orientada a la justicia social y al servicio comunitario. Esta experiencia les permite comprender la realidad de las poblaciones en situación de vulnerabilidad, sensibilizándose ante problemáticas como violencia de género, conflictos laborales, derechos de infancia, migración y acceso a servicios

básicos, entre otros ámbitos en los que la intervención legal se vuelve urgente y necesaria.

Este estudio se propone analizar de manera detallada la relevancia de la litigación jurídica en los consultorios gratuitos, su impacto en las comunidades beneficiarias y los desafíos institucionales que enfrentan, tales como limitaciones presupuestarias, falta de infraestructura, exceso de demanda y necesidad de consolidar redes de colaboración interinstitucional. Comprender la dinámica de estos mecanismos es fundamental para el diseño de políticas públicas orientadas a garantizar una justicia inclusiva, el fortalecimiento del Estado de Derecho y la sostenibilidad del sistema judicial, tanto en América Latina como en otras regiones del mundo donde las desigualdades estructurales siguen condicionando el acceso efectivo a la justicia.

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación se desarrolló mediante un estudio de campo en diversos consultorios jurídicos gratuitos de la región, empleando una metodología mixta que integra técnicas cualitativas y cuantitativas para obtener una comprensión holística del fenómeno. El componente cuantitativo incluyó la aplicación de encuestas estructuradas a 20 usuarios de los servicios jurídicos gratuitos, seleccionados mediante un muestreo aleatorio estratificado. Estas encuestas recabaron información sobre datos demográficos, tipo de casos atendidos, nivel de satisfacción con el servicio y percepción de acceso a la justicia. Adicionalmente, se analizaron estadísticas de los últimos cinco años sobre el número y tipos de casos atendidos, tasas de éxito y tiempo promedio de resolución.

El análisis cuantitativo reveló un incremento significativo del 35% en la demanda de servicios jurídicos gratuitos en los últimos cinco años, lo que subraya la creciente necesidad de estos servicios en la comunidad. Los casos más frecuentes estuvieron relacionados con derecho familiar (40%), laboral (30%) y civil (20%), reflejando las principales áreas de conflicto legal que afectan a los sectores más vulnerables de la sociedad.

La tasa de resolución exitosa de casos fue del 68%, con un tiempo promedio de resolución de 8 meses, lo que indica una eficacia considerable en la prestación de estos servicios, aunque también señala áreas de mejora en términos de celeridad. Es destacable que el 75% de los usuarios encuestados reportó un alto nivel de satisfacción con los servicios recibidos, lo que sugiere que, a pesar de las limitaciones, estos consultorios están cumpliendo un papel crucial en la satisfacción de las necesidades legales de la población.

Los datos cualitativos aportaron una comprensión más profunda de estos resultados numéricos. Las entrevistas con los abogados revelaron una alta carga de trabajo y limitaciones en recursos, pero también un fuerte

compromiso con la justicia social. Muchos de ellos expresaron la satisfacción personal que obtienen al poder ayudar a quienes más lo necesitan, aunque también manifestaron preocupación por el desgaste profesional debido a la intensidad y volumen de casos. Los clientes, por su parte, expresaron que el acceso a estos servicios les permitió defender sus derechos en situaciones donde, de otro modo, no habrían podido hacerlo por razones económicas (Jaramillo & Balanzátegui 2025). Muchos describieron los consultorios gratuitos como su “última esperanza” para resolver problemas legales que afectaban significativamente sus vidas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Estos hallazgos subrayan la importancia crítica de la litigación jurídica gratuita en la promoción del acceso a la justicia. Estos servicios no solo proporcionan representación legal a quienes no pueden costearla, sino que también contribuyen a la educación legal de la comunidad y al empoderamiento de grupos marginados. Al proporcionar asesoramiento y representación legal, los consultorios gratuitos están ayudando a equilibrar la balanza de la justicia, permitiendo que individuos y familias de bajos recursos puedan defender sus derechos y resolver conflictos legales que, de otra manera, podrían tener consecuencias devastadoras en sus vidas.

Sin embargo, el estudio también identificó desafíos significativos que enfrentan estos consultorios. La creciente demanda de servicios está ejerciendo una presión considerable sobre los recursos limitados de los consultorios, lo que puede afectar la calidad y la rapidez de la atención. Muchos abogados reportaron sentirse abrumados por la cantidad de casos que deben manejar simultáneamente, lo que puede llevar a un menor tiempo de dedicación a cada caso individual. Además, se observó una necesidad de mayor especialización en áreas legales específicas, ya que la complejidad de ciertos casos requiere conocimientos especializados que no siempre están disponibles en estos consultorios.

Otro desafío importante identificado fue la necesidad de mejorar la infraestructura tecnológica para agilizar los procesos. Muchos consultorios aún dependen en gran medida de sistemas de archivo físicos y procesos manuales, lo que puede ralentizar la gestión de casos y dificultar el seguimiento eficiente de los mismos. La implementación de sistemas de gestión de casos digitales y otras herramientas tecnológicas podría mejorar significativamente la eficiencia y efectividad de estos servicios (Arcos Pazmiño et al., 2024).

A pesar de estos desafíos, la investigación concluye que la litigación jurídica en consultorios gratuitos desempeña un papel crucial en la promoción de un sistema de justicia más equitativo. Este estudio proporciona evidencia empírica sobre su efectividad y los retos que enfrenta, ofreciendo una base sólida para la formulación de políticas

y prácticas que puedan mejorar estos servicios vitales. Los desafíos financieros y estructurales de los consultorios jurídicos gratuitos requieren políticas públicas integrales que aseguren su sostenibilidad (Barba-Tamayo et al., 2025). Se recomienda aumentar la inversión pública en estos servicios, implementar programas de capacitación continua para los abogados, y desarrollar alianzas con universidades y organizaciones no gubernamentales para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios ofrecidos. Además, es fundamental considerar estrategias para abordar el desgaste profesional de los abogados y personal administrativo, posiblemente a través de la rotación de tareas, el aumento de personal, y la provisión de apoyo psicológico. La mejora de la infraestructura tecnológica también debería ser una prioridad, ya que podría aumentar significativamente la eficiencia y la capacidad de manejo de casos, este estudio resalta la importancia vital de la litigación jurídica en consultorios gratuitos como un medio para garantizar el acceso a la justicia para todos los miembros de la sociedad, independientemente de su situación económica. A pesar de los desafíos, estos servicios continúan siendo un faro de esperanza para muchos, y su fortalecimiento y expansión deben ser una prioridad para cualquier sociedad que aspire a la equidad y la justicia social.

Hablar del al acceso a la justicia, es referimos a un derecho fundamental que permite a los seres humanos hacer valer sus derechos de forma justa y equitativa ante la ley sin prejuicio de discriminación por sexo, raza, edad o religión (Batris de la Cruz & Pérez, 2022)

Un Estado de Derecho no se puede forjar si este no garantiza las reglas que permitan el acceso a la justicia de una manera igualitaria, partiendo de esta aseveración asumimos que, el Sistema de Justicia es una pieza importante para que los ciudadanos y las ciudadanas depositen en él toda su confianza para el cumplimiento del ordenamiento jurídico situando con un énfasis mayor a los grupos más vulnerables que deben ser visualizadas con gran relevancia ya que han sido las más discriminadas para un disfrute pleno de todos sus derechos.

El derecho al acceso a la justicia, como ya se ha hecho referencia, constituye un derecho fundamental que debe respetarse y velar por su debido cumplimiento, no existe justificación alguna para que los Estados incurran en su violación (Batris de la Cruz & Pérez, 2022; Fuentes-Águila et al., 2025; Medina-Peña & Torres-Espinoza, 2024).

La población sigue en aumento, situación que se convierte en condicionante para que el Organismo Judicial como ente rector en materia de administrar la justicia, tome medidas que permitan a este sector poblacional poder acceder a la misma, sin ninguna clase de barreras, no solamente por los propios sistemas utilizados o las relativas a la infraestructura, sino que también la misma pobreza que impide un acercamiento ecuaníme ante los órganos

jurisdiccionales; siendo esta última de muchísima notabilidad para que los operadores de justicia lo consideren de manera primordial y puedan generar cambios sustanciales que conlleven a la transformación de los procesos de forma eficiente y eficaz, cambiando así las situación de exclusión por la que actualmente atraviesan.

Los Consultorios Jurídicos Gratuitos forman parte integral de la Red Complementaria a la Defensa Jurídica Pública, brindando un servicio de patrocinio y asesoría jurídica gratuita a las personas que, por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural, no puedan contar con una defensa técnica, eficiente, eficaz y de calidad para la protección de sus derechos.

El artículo 193 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que las facultades de Jurisprudencia, Derecho o Ciencias Jurídicas de las universidades organizarán y mantendrán servicios de defensa y asesoría jurídica a personas de escasos recursos económicos y grupos que requieran atención prioritaria. Para que otras organizaciones puedan brindar dicho servicio deberán acreditarse y ser evaluadas por parte de la Defensoría Pública. La ley Orgánica de la Defensoría Pública y el Código Orgánico de la Función Judicial determinan que la Defensoría Pública será responsable de monitorear el servicio de patrocinio y asesoría jurídica de los consultorios jurídicos gratuitos, como también de los procedimientos de acreditación, renovación y evaluación de estos, verificando la calidad de los servicios prestados a la ciudadanía.

La litigación jurídica gratuita tiene un impacto significativo en el acceso a la justicia, especialmente para las personas y comunidades que enfrentan barreras económicas y sociales, esta al ser gratuita elimina o reduce los costos asociados con los servicios legales, como honorarios de abogados, costos de presentación de casos y otros gastos judiciales, esto es crucial para personas de bajos ingresos que de otro modo no podrían permitirse contratar representación legal. La defensa pública gratuita opera como un mecanismo de nivelación social que garantiza el principio de igualdad ante la ley. Al proporcionar acceso a servicios legales gratuitos, se empodera a las personas vulnerables, permitiéndoles defender sus derechos y participar activamente en el sistema judicial, incluyendo a minorías étnicas, mujeres, niños, personas con discapacidades y otros grupos marginados, de tal forma que contribuye a equilibrar el sistema judicial, ya que brinda a las personas de bajos recursos la oportunidad de tener representación legal competente, ayudando a nivelar el campo de juego entre aquellos que pueden pagar abogados privados y aquellos que no pueden.

Con la disponibilidad de asistencia legal gratuita, las disputas pueden resolverse de manera más eficiente y efectiva, los consultorios jurídicos gratuitos y las defensorías públicas pueden ayudar a filtrar casos, proporcionando asesoramiento inicial y resolviendo conflictos antes de

que lleguen a los tribunales, al hacerlo la litigación gratuita puede reducir la carga sobre el sistema judicial, permitiendo que los tribunales se concentren en casos más complejos y graves.

Los programas de litigación gratuita a menudo incluyen componentes de educación y concienciación legal, informando a las personas sobre sus derechos y cómo ejercerlos, esto puede tener un efecto a largo plazo en la capacidad de las comunidades para abordar sus propios problemas legales de manera más efectiva, pero al proporcionar asesoramiento y representación legal gratuita, se pueden prevenir injusticias y abusos, especialmente en casos donde las personas pueden ser explotadas o maltratadas debido a su falta de conocimiento legal o recursos para defenderse. Cuando las personas ven que tienen acceso a una representación justa y competente, su confianza en el sistema legal aumenta, esto es esencial para la legitimidad del sistema judicial y la cohesión social en general.

Actualmente, en todo el país, la Defensoría Pública ha acreditado a más de 80 Consultorios Jurídicos Gratuitos.

Es importante reconocer el tema de la educación legal dentro del tema abordado en la investigación, ya que, Este tipo de educación abarca una amplia gama de actividades y programas diseñados para informar y capacitar a los ciudadanos sobre cuestiones legales básicas, sus derechos y obligaciones, y cómo navegar el sistema judicial, la educación legal proporciona a las personas el conocimiento y las herramientas necesarias para entender sus derechos y cómo defenderlos, esto les permite tomar decisiones informadas y actuar de manera proactiva en situaciones legales, con un mayor conocimiento legal, las personas pueden identificar cuándo sus derechos han sido vulnerados y buscar la asistencia adecuada, mejorando el acceso a la justicia al reducir la dependencia de asesoramiento legal costoso y aumentar la autodefensa. Al entender mejor sus derechos y obligaciones, las personas pueden evitar conflictos legales antes de que surjan, como disputas laborales, conflictos de propiedad y malentendidos contractuales.

La educación legal puede fortalecer la confianza de la comunidad en el sistema judicial y en las instituciones legales, cuando las personas comprenden cómo funciona el sistema y sienten que pueden navegarlo, es más probable que confíen en su capacidad para proporcionar justicia. Los programas de educación legal a menudo incluyen formación en habilidades prácticas, como la redacción de documentos legales, la presentación de quejas y la representación en procedimientos administrativos, estas habilidades son valiosas para la vida cotidiana y el trabajo, por tal motivo es crucial que la educación sea accesible y relevante para todos los segmentos de la sociedad, incluyendo a personas de diferentes antecedentes culturales, lingüísticos y socioeconómicos, implicando la traducción de materiales educativos, la organización de talleres en

diferentes idiomas y la adaptación de los programas a las necesidades específicas de cada comunidad.

Dentro de la investigación se observa que el sistema judicial gratuito en Ecuador enfrenta varias limitaciones de recursos que afectan su capacidad para proporcionar servicios eficaces y eficientes, una de las principales limitaciones es el financiamiento insuficiente, la falta de recursos financieros adecuados restringe la capacidad del sistema para contratar y retener a un número suficiente de abogados y personal de apoyo, y también para cubrir otros costos operativos esenciales, esto resulta en una sobrecarga de trabajo, ya que la demanda de servicios legales gratuitos a menudo supera la capacidad disponible. La sobrecarga de trabajo lleva a tiempos de espera prolongados y una menor calidad de servicio debido a la presión sobre el personal.

Además, la falta de capacitación y desarrollo profesional es otro desafío significativo, con recursos limitados, las oportunidades de capacitación y desarrollo profesional para los defensores públicos y otros empleados del sistema son escasas, lo que afecta la calidad de la representación legal que se ofrece a los clientes. La infraestructura física y tecnológica deficiente también dificulta la prestación de servicios eficientes, la falta de oficinas adecuadas, equipamiento tecnológico y acceso a bases de datos legales y otros recursos necesarios son problemas comunes que limitan la eficacia del sistema. El acceso geográfico limitado es una preocupación particular en áreas rurales y remotas, la falta de oficinas locales y recursos para cubrir estas regiones deja a muchas personas sin la representación legal necesaria, incluso cuando hay financiamiento disponible, la escasez de personal capacitado y experimentado es un desafío significativo, es difícil encontrar y retener abogados calificados dispuestos a trabajar en el sector público con salarios competitivos.

Otro desafío es la sobrecarga de trabajo profesional en el sistema judicial gratuito de Ecuador es un problema significativo que afecta tanto la calidad como la eficiencia de los servicios legales prestados a la población. La demanda de asistencia legal gratuita supera con creces la capacidad de los recursos humanos disponibles, este desajuste entre demanda y capacidad se traduce en una carga de trabajo excesiva para los defensores públicos y otros profesionales del sistema judicial. La presión sobre estos profesionales puede resultar en tiempos de espera prolongados para los clientes, así como en una atención menos personalizada y detallada en cada caso.

Dentro del sistema judicial gratuito de la República del Ecuador una de las principales necesidades es la capacitación continua en áreas específicas del derecho, los defensores públicos deben estar bien informados sobre las leyes y regulaciones más recientes, así como sobre las interpretaciones jurisprudenciales actuales, ofreciendo una representación legal efectiva y actualizada. La capacitación en áreas específicas como el derecho penal,

derecho de familia, derecho laboral, derecho ambiental y derechos humanos es crucial, cada una de estas áreas tiene sus propias particularidades y requerimientos legales, y los defensores deben ser capaces de manejar casos complejos y especializados con competencia.

En los resultados de las entrevistas dirigidas a los estudiantes de la Universidad Nacional de Chimborazo nos demuestran que es importante el incluir materias que refuercen la argumentación jurídica para Hernández & Rivadeneira (2020)

La argumentación jurídica debe ser incluida en el currículo de grado de la carrera de abogacía por trascender a todas las ramas del Derecho y a toda actividad jurídica; no es solo aplicable los fallos judiciales, sino también a las resoluciones de las autoridades públicas (actos administrativos), para el ejercicio profesional del abogado y para la propia producción de las normas jurídicas.

La argumentación jurídica debe ser incluida en el currículo de grado de la carrera de abogacía por trascender a todas las ramas del Derecho y a toda actividad jurídica; no es solo aplicable los fallos judiciales, sino también a las resoluciones de las autoridades públicas (actos administrativos), para el ejercicio profesional del abogado y para la propia producción de las normas jurídicas.

La formación práctica en litigación permite a los estudiantes de derecho desarrollar competencias esenciales que no pueden adquirirse únicamente a través del estudio teórico (Naranjo Luzuriaga et al., 2022). Muchos abogados en sus artículos científicos hacen un énfasis en la importancia de la argumentación jurídica, y sobre todo el incluir materias que apoyen a desarrollar estas habilidades desde una etapa temprana de los abogados, además el interpretar correctamente las normas jurídicas, ya que la argumentación jurídica no es necesaria solamente para el libre ejercicio, el derecho es utilizado en múltiples ramas y la necesidad de abogados siempre será necesario.

En el libre ejercicio de un abogado, la argumentación jurídica es fundamental ya que de ella dependemos al momento de realizar un juicio y poder ganar casos que nos brindara un reconocimiento ante el público y por ende ingresos.

La argumentación jurídica en el ámbito administrativo para presentar escritos, oficios con una buena argumentación jurídica, es decir una correcta motivación del porqué se acepta o se niega cierta acción.

En el ámbito jurisdiccional, cuando un juez emite una sentencia, esta debe estar motivada y por ende contener varios argumentos que buscan aclarar el por qué se tomó esa decisión para resolver el problema jurídico.

Entonces podemos llegar a la conclusión que la enseñanza del derecho no es solo la parte teórica donde conocemos la norma, los procesos judiciales y como se llevan a

cabo y la estructura que debe tener una demanda, denuncia, escrito, presentación de pruebas, etc.

Es fundamental para los estudiantes, aparte de conocer la norma y el proceso y la estructura que deben tener los procesos legales, el poder ponerlos en práctica ya que no siempre llevarán la misma estructura y se debe conocer en la realidad como se estructura cada uno de los procesos que realizaremos como abogados, por eso las practicas preprofesionales en consultorios jurídicos es fundamental

Las practicas preprofesionales es el acercamiento del estudiante universitario a la vida profesional y empezar a poner en práctica sus conocimientos adquiridos en sus años de estudiante, estando en concordancia de lo dicho en Rodríguez Díaz et al. (2022).

La verdadera educación es aquella en donde el estudiante adquiere sus conocimientos tanto en el salón de clases como en la práctica, de manera que estas dos se fusionen y garanticen la autonomía y competencias requeridas para su profesión.

Estas prácticas permitirán a los estudiantes poner en práctica sus conocimientos adquiridos en su etapa estudiantil y reforzarlas al momento de realizar verdaderos procesos jurídicos, pulir los errores que se puedan cometer al inicio del verdadero ejercicio del derecho, permite determinar las fortalezas y las debilidades más puntuales al realizar prácticas y empezar a pulirlas para al momento de empezar a ejercer solos tener los menos errores posibles entre los nuevos abogados (Rodríguez Díaz et al., 2022).

Pero nos olvidamos de una parte igual de fundamental que el conocer la norma y con el ser un buen orador, el poder argumentarla correctamente en un juicio y el tener las bases para poder desempeñarnos correctamente en un juicio, por eso los estudiantes entrevistados opinaron que para alcanzar un buen desempeño en un juicio se deben realizar simulaciones de audiencias en las clases.

La simulación de audiencias constituye una herramienta pedagógica fundamental para el desarrollo de habilidades litigantes en los estudiantes de derecho (Bruzón, 2021). Como podrá comprobarse en el desarrollo del estudio, la relevancia de la temática en discusión se encuentra interconectada con el modelo educativo y pedagógico institucional, los objetivos de la carrera de Derecho, el perfil profesional y de egreso, que siguen en su diseño las pautas establecidas en el proyecto *Tuning América Latina*; proyecto que contribuyó a develar, en el campo específico de la formación jurídica, la necesidad de aplicar reformas que potencien la flexibilización del currículo, con énfasis en la formación práctica, crítica y una mayor participación de los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, superando con ello la tradicional y dominante matriz lógica de la formación dogmática, caracterizada por la transmisión de conocimientos

desde docente y la absorción de estos por parte de los estudiantes (Beneitone et al., 2013)

La importancia del desarrollo de simulaciones de escucha en la formación jurídica ha sido señalada por los órganos de garantía de calidad del sistema de educación superior ecuatoriano, representando un indicador de calidad en la evaluación del entorno de aprendizaje de la facultad de derecho. La actualización del “Modelo Final de Evaluación del Entorno de Aprendizaje de la Licenciatura en Derecho” del Consejo para el Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior (CACES) en abril de este año estableció como estándar que la carrera brinda a sus estudiantes la simulación de audiencias relevantes en un ambiente físico. o entorno virtual bajo supervisión de profesores y personal académico (Bruzón, 2021).

Los elementos fundamentales de este indicador son:

- Las simulaciones realizadas por los alumnos de estos cursos están supervisadas directamente por el profesor de la materia de que se trate.
- La simulación se acerca bastante a la realidad.
- Las simulaciones son diseñadas por profesores de carrera que consideran la instrucción pedagógica a partir de prácticas realizadas en clase y luego implementadas en la simulación.

La aplicación de estas simulaciones contribuyen a que los estudiantes se comiencen a familiarizar con los procesos judiciales y el actuar de forma correcta en estos casos, eso beneficia a que al momento de ejercer la profesión tengan cierta practica con como desenvolverse, pero también es fundamental el asistir a audiencias reales que contribuyan a conocer de una mejor forma como los abogados actúan al momento de emplear su litigación, los estudiantes pueden aprender mucho de observar la litigación de personas con experiencia en las audiencias.

Pero las simulaciones de audiencias deben ser realizadas y una mayor supervisión del docente con la finalidad que estas simulaciones sean lo más parecidas a la realidad judicial ya que tienen la experiencia suficiente para conocer cómo se desarrollan, a diferencia de los estudiantes que no tienen la suficiente practica en este ámbito.

La importancia de los consultorios jurídicos gratuitos radica en su capacidad de proporcionar acceso a la justicia para personas en condiciones de vulnerabilidad económica y social. El modelo de consultorios jurídicos universitarios permite la integración efectiva entre la formación académica teórica y la práctica profesional supervisada (Batris de la Cruz & Pérez, 2022). Estos espacios, además de ser centros de asistencia legal, son laboratorios vivos de aprendizaje práctico para los futuros abogados, quienes tienen la oportunidad de aplicar conocimientos teóricos en contextos reales. Este proceso no solo les permite desarrollar habilidades esenciales como la argumentación oral y escrita, sino que también fortalece su sensibilidad social al enfrentarse directamente con las

realidades de los usuarios que buscan ayuda, este estudio, realizado a través de una metodología mixta que combina enfoques cualitativos y cuantitativos, pone de manifiesto no solo la relevancia de estos servicios, sino también los desafíos significativos que enfrentan.

Uno de los hallazgos más destacados es el aumento del 35% en la demanda de servicios jurídicos gratuitos en los últimos cinco años. Este incremento refleja una creciente necesidad de asistencia legal en la comunidad, especialmente en áreas como el derecho familiar, laboral y civil, donde los individuos suelen enfrentarse a situaciones críticas que afectan su bienestar. La tasa de resolución de casos del 68% indica una eficacia considerable, aunque también señala áreas que requieren mejoras, particularmente en términos de rapidez y especialización.

Las entrevistas con abogados que trabajan en estos consultorios revelan un compromiso profundo con la justicia social, pero también evidencian una carga de trabajo abrumadora. Muchos abogados expresan satisfacción al ayudar a quienes más lo necesitan, pero también manifiestan preocupación por el desgaste profesional. Este aspecto humano es crucial, ya que el bienestar del personal legal impacta directamente en la calidad del servicio ofrecido. La presión constante puede llevar a un menor tiempo de atención por caso, lo que podría comprometer la defensa efectiva de los derechos de los usuarios.

El acceso a servicios jurídicos gratuitos es considerado por los clientes como una "última esperanza" para resolver conflictos legales, permitiéndoles defender sus derechos en situaciones donde no podrían acceder a representación legal por razones económicas. Sin embargo, el estudio señala desafíos importantes, como la deficiente infraestructura tecnológica en muchos consultorios, lo que ralentiza los procesos y dificulta el seguimiento de casos. La implementación de sistemas digitales podría mejorar la eficiencia operativa y facilitar el manejo del creciente volumen de casos. Para fortalecer estos servicios, se recomienda aumentar la inversión pública, establecer programas de capacitación continua para abogados y fomentar alianzas con universidades y ONG. Estas medidas no solo mejorarían la calidad del servicio, sino que también ayudarían a mitigar el desgaste profesional del personal involucrado. Los consultorios jurídicos gratuitos no solo son un pilar del acceso a la justicia, sino también una pieza clave en la formación de abogados más preparados y conscientes. Reforzar estas iniciativas no solo beneficiará a los futuros profesionales del derecho, sino que también contribuirá a construir una sociedad más equitativa y justa (Vera & Pérez 2024).

CONCLUSIONES

La influencia de la litigación jurídica en el aprendizaje pre-profesional dentro de los consultorios jurídicos es profunda y multifacética. A través de la participación en casos reales, los estudiantes de derecho adquieren una

comprensión práctica del sistema judicial que no pueden obtener exclusivamente en el aula. La exposición a la litigación les permite desarrollar habilidades críticas como la investigación legal, la redacción de documentos judiciales, la estrategia de casos y la argumentación oral, esta experiencia práctica es invaluable para consolidar su conocimiento teórico y prepararlos para sus futuras carreras como abogados. Además, al trabajar directamente con clientes y enfrentarse a los desafíos de la representación legal, los estudiantes aprenden la importancia de la ética profesional, la empatía y la responsabilidad social. La experiencia en consultorios jurídicos también fomenta el desarrollo de habilidades de trabajo en equipo y la capacidad de manejar la presión, factores esenciales en la práctica legal.

Las capacidades de litigación jurídica de los abogados influyen significativamente en la percepción pública y la imagen de los consultorios jurídicos. Cuando los abogados demuestran habilidades de litigación competentes y efectivas, generan confianza y credibilidad tanto entre sus clientes como en la comunidad en general. La percepción pública de los consultorios jurídicos mejora cuando se asocia con abogados que tienen un historial de éxito en la resolución de casos y que son conocidos por su profesionalismo y dedicación. Esta percepción positiva no solo atrae a más clientes que buscan servicios legales gratuitos o de bajo costo, sino que también puede influir en el apoyo financiero y logístico de donantes, gobiernos y otras entidades que valoran la calidad del servicio prestado.

Los desafíos y limitaciones en la práctica de habilidades de litigación jurídica dentro de los consultorios jurídicos son variados y pueden obstaculizar tanto el desarrollo profesional de los estudiantes como la prestación de servicios legales de calidad. Uno de los principales desafíos es la falta de recursos, que incluye insuficiente financiamiento, personal limitado y recursos tecnológicos inadecuados. Estas limitaciones pueden restringir la capacidad de los consultorios para ofrecer una formación práctica robusta y supervisión adecuada.

Además, la alta carga de trabajo y la sobrecarga de casos pueden impedir que los abogados y supervisores dediquen el tiempo necesario para guiar y educar a los estudiantes de manera efectiva. Estos desafíos no solo afectan la calidad de la educación y la formación práctica que reciben los estudiantes, sino que también pueden impactar la calidad del servicio que los consultorios pueden ofrecer a sus clientes.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Arcos Pazmiño, D. A., Flores Cano, K. N., & Méndez Cabrita, C. M. (2024). Implicaciones de las tecnologías emergentes en el ámbito judicial. *Universidad Y Sociedad*, 16(6), 306–315. <https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/4770>

- Barba-Tamayo, E. P., Haro-Avalos, J. L., Carrera-Ortiz, Álvaro I., & Segura-Fonseca, A. B. (2025). Caracterización de los usuarios del consultorio jurídico Unach-Conagopare como línea base de política pública. *Debate Jurídico Ecuador*, 8(1), 40–58. <https://doi.org/10.61154/dje.v8i1.3712>
- Batris de la Cruz, A. R. C., & Pérez, O. (2022). El acceso a la justicia como un derecho humano en la construcción del estado de derecho. *Revista Lex Mercatoria Doctrina Praxis Jurisprudencia y Legislación*, 20, 1–19. <https://doi.org/10.21134/lex.vi20.1775>
- Beneitone, P., Esquetini, C., González, J., Maletá, M. M., Siufi, G., & Wagenaar, R. (2013). Reflexiones y perspectivas de la educación superior en América Latina: Informe final - Proyecto Tuning América Latina 2004-2007. Universidad de Deusto. <http://www.deusto-publicaciones.es/deusto/pdfs/tuning/tuning05.pdf>
- Bruzón Viltres, C. (2021). Simulación de audiencias virtuales como actividad de aprendizaje práctico en la carrera de derecho, UMET, Ecuador. *Revista Universidad y Sociedad*, 13(6), 275–285. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202021000600275
- Fuentes-Águila, M. R., Castellanos-Fuentes, P. E., Bedón-Garzón, R. P., & Ávila-Urdaneta, J. G. (2025). *Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional comentada, concordada, anotada y con reflexiones teórico-prácticas. Parte I*. Editorial UMET.
- Hernández, B., & Rivadeneira, M. (2020). La argumentación jurídica en la formación de los estudiantes universitarios de Derecho. *Boletín Redipe*, 9(3), 121–125. <https://doi.org/10.36260/rbr.v9i3.935>
- Jaramillo, F., & Balanzátegui, R. (2025). La sobrecarga laboral y su incidencia en la satisfacción de los funcionarios públicos en el Ecuador. *Revista Científica Multidisciplinaria InvestiGo*, 6(15), 411–427. <https://doi.org/10.56519/da81c084>
- Medina-Peña, R., & Torres-Espinoza, J. J. (Coord.) (2024). *El neoconstitucionalismo en la protección de los nuevos derechos*. Sophia Editions.
- Naranjo Luzuriaga, E. J., Vinuesa Ocho, N. V., & Díaz Basurto, I. J. (2022). Habilidades del estudiante de derecho para el desarrollo de prácticas de pruebas en juicio oral. *Conrado*, 18(89), 317–326. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1990-86442022000600317
- Rodríguez Díaz, J. L., Cabrera Olvera, J. L., & Muñoz Guanga, A. P. (2022). El éxito de las Prácticas preprofesionales: ¿De qué depende? *Revista Habanera de Ciencias Médicas*, 21(2). http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-519X2022000200015
- Romero Noboa, W. P., Romero Oviedo, J. E., Fernández Villacis, M. J., Revelo Barrionuevo, L. A., & Carrasco Benavides, Y. N. (2025). Los Consultorios Jurídicos Gratuitos, y la Tutela Judicial Efectiva en Adultos Mayores. *Tesla Revista Científica*, 5(1), e417. <https://doi.org/10.55204/trc.v5i1.e417>
- Vera, C., & Pérez, G. (2024). Acceso a la justicia para grupos prioritarios: una evaluación de los resultados del centro de apoyo de la Universidad San Gregorio de Portoviejo. *European Public & Social Innovation Review*, 9, 1–19. <https://doi.org/10.31637/epsir-2024-770>